

## LOS TESTIMONIOS CONTRADICTORIOS DE EMILIA MARROQUÍN

Emilia Marroquín de Pedro debió ser una mujer de carácter e hizo todo lo posible por salvar las vidas de los socialistas Francisco Cruz Salido y Julián Zugazagoitia Mendieta. La soltera de treinta y ocho años no solo se presentó para testimoniar en el consejo de guerra a favor de los periodistas, ante un tribunal presidido por un general, sino que también remitió al juez un comprometedor texto en defensa de los encausados firmado el 20 de octubre de 1940. Al lado de su firma, consta el número de carnet como excautiva: el 5584. El dato permite pensar que la también huérfana con domicilio en la madrileña calle Hernán Cortés, n.º 8 era una persona identificada con los vencedores y, desde esa aparente seguridad, se atrevió a resaltar el comportamiento humanitario de los procesados durante la guerra. El gesto es tan solidario como compartido con otros testigos en el sumario 100.159 (AGHD). En cualquier caso, la declaración se situaría en la línea de los testimonios del novelista Wenceslao Fernández Flórez, el periodista Manuel Aznar e, incluso, de Ramón Serrano Suñer en el mismo proceso, donde los acusados eran seis destacados republicanos.

La identificación de Emilia Marroquín con los vencedores parece obvia a tenor de una primera lectura del citado texto, que tras identificar a la declarante comienza manifestando su amistad con Francisco Cruz Salido «desde hace unos quince años» sin indicar los motivos de esa relación. Ambos tenían una edad similar, eran vecinos del mismo barrio y trabajaban como empleados de la Compañía Telefónica. Vista esa circunstancia laboral sorprendentemente ocultada al tribunal, parece comprensible «que a pesar de conocer éste [el periodista] la ideología de la manifestante, no [vacilara] en prestarle la ayuda que a continuación se detalla». Es decir, Emilia Marroquín está dispuesta a detallar la ayuda recibida, pero no a explicar el origen de la relación de amistad que mantuvo con Francisco Cruz Salido. La verdad a medias resulta significativa. La justificación de esa amistad con un significado socialista le podía llevar a territorios donde las explicaciones ante un tribunal militar no resultaban fáciles.

Su carnet de exautiva le protegía, aunque no tanto una trayectoria nítida de derechas como sus compañeros de testimonios a favor de los procesados.

Emilia Marroquín vivió en Madrid durante la guerra, siempre en compañía de su hermana Sabina y de su cuñado Ezequiel de las Heras, que hizo varias gestiones ante los tribunales republicanos para ayudarlo. La mecanógrafa que por entonces prestaba sus servicios en el departamento comercial de la Compañía Telefónica lo debió pasar mal a tenor de lo explicado en el testimonio escrito del 20 de octubre de 1940: «Perseguida desde el mes de septiembre de 1936, en el que sufrió distintas detenciones, fue detenida nuevamente en el mes de octubre, acusándole de espionaje y de haberse lamentado -en términos insultantes para el gobierno rojo- de la muerte de Calvo Sotelo (q.e.p.d.)».

Las «distintas detenciones» es un plural poco creíble y menos documentado. Tal vez pudieron ser controles callejeros o similares que acarrearían problemas en un clima de evidente tensión. Sin embargo, nos consta que el 13 de octubre de 1936 Emilia Marroquín -como veremos más adelante- fue detenida bajo la acusación de propagar bulos como desafecta al régimen, aunque quedó absuelta el 9 de febrero de 1937 por falta de pruebas. Este último dato, como es previsible, no figura en el testimonio incluido en el sumario del consejo de guerra. Tampoco aparece una segunda absolución dictada por el Juzgado n.º 8 el 14 de julio de 1937. Emilia Marroquín fue una cautiva de los republicanos en las cárceles madrileñas, pero nunca resultó condenada por un juzgado por falta de pruebas que sustentaran unas acusaciones demasiado genéricas.

A raíz de su primera detención en octubre de 1936, los familiares de Emilia Marroquín, «al ver la imposibilidad de dar con su paradero (pues personas en todas las checas donde había estado anteriormente -incluso en la de Fomento, donde se encontraba- les negaron que estuviera en ninguna de ellas), acudieron al señor Cruz Salido, y no estando éste, su señora les presentó al señor Zugazagoitia, logrando, mediante las gestiones de dicho señor, localizarla en la checa de Fomento». Emilia Marroquín se convierte así en una heroína en la línea de lo representado por la protagonista del film *Rojo y Negro* (1942), de Carlos Arévalo. Los antecedentes escritos de este personaje son numerosos en una posguerra donde proliferaron los testimonios de los exautivos donde nunca se hacía referencia a las absoluciones o las liberaciones.

La documentación de los sumarios de la justicia republicana no respalda esa versión del viacrucis penitenciario de Emilia Marroquín de checa en checa. Según los documentos que más adelante analizaremos, la empleada de la Compañía Telefónica se encontraba recluida en la cárcel de mujeres de San Rafael. La circunstancia aparece en la instrucción sumarial sin que, en ningún momento, se mencione una detención por parte de las milicias o una reclusión en distintas checas, entre las cuales no podía faltar la renombrada de Fomento. La testigo que declara en 1940 no estaba obligada a precisar su suerte y, puestos a impresionar al tribunal militar, la sola mención de la temible checa de Fomento aportaba un plus de veracidad a la huérfana.

Emilia Marroquín debía completar su imagen de víctima solidaria mostrando algún rasgo de meritoria generosidad en un marco de adversidad y persecución por motivos nunca aclarados. De acuerdo con el testimonio escrito, «en el mes de noviembre (día nueve o diez) fue el señor Cruz a visitarla en la cárcel, situada entonces en la plaza del Conde de Toreno, manifestándole su deseo de ayudarla en lo que estuviera en su mano». Resulta difícil entender que, en medio de tan cruciales días del otoño de 1936 para la suerte de Madrid, un Francisco Cruz Salido a punto de salir con destino a Valencia con el gobierno republicano o a Bilbao para hacerse cargo de un periódico tuviera tiempo de visitar a su amiga, en una cárcel que -según los documentos- no era la de Conde de Toreno, por entonces ocupada por mujeres porque Las Ventas había pasado a ser masculina. El gesto del periodista habría sido un tanto sorprendente, pero más asombrosa es la generosa respuesta de la encarcelada. Emilia Marroquín, sabiendo del peligro de estar presa en época de sacas como las de Paracuellos, prefiere que su amigo se preocupe por otros represaliados de más relieve:

La exponente le manifestó su deseo, como ayuda suprema que pudiera proporcionarle, de que se interesase por la suerte de los señores don Nicolás Galarza, don Ángel Santa Úrsula y don Leopoldo Granero, que se encontraban en la cárcel Modelo, y de quienes a pesar de haberles escrito no tenía noticias procurando ponerles a salvo, pues por los rumores llegados a la cárcel los consideraba en gran peligro.

Los citados rumores tenían fundamento. A tenor de lo escrito en 1940, Francisco Cruz Salido no solo se interesó por la compañera de trabajo en noviembre de 1936, sino que inmediatamente se trasladó a la cárcel Modelo para saber de la suerte corrida por los tres presos. Se supone que lo hizo a pesar de que uno de

ellos, Ángel Santa Úrsula, era un jefe de la Compañía Telefónica expulsado de la misma por simpatizar con los sublevados y posteriormente detenido. La circunstancia la debía conocer el periodista por trabajar en la misma empresa. Bien es cierto que Emilia Marroquín tenía, al parecer, motivos para interesarse por la suerte del ex jefe de la Compañía Telefónica. Lo comprobaremos más adelante, pero resulta incomprensible que entre las urgencias de aquellas horas para un destacado militante socialista estuviera hacer esa visita, que por otra parte resultó infructuosa, pues los citados ya no se encontraban en la cárcel Modelo. El listado de los ejecutados en Paracuellos o en cualquier saca pudo ser su destino y, una vez muertos, no podrían desmentir el testimonio de Emilia Marroquín.

Según el texto remitido al tribunal del consejo de guerra, el 20 de julio de 1937 Francisco Cruz Salido «se presentó en el convento de los Paules para ponerla en libertad (pues a pesar de haber respondido por ella en el juicio, sus perseguidores se obstinaron en evacuarla) haciendo para ello un viaje desde Valencia con este exclusivo objeto». Los documentos procesales desmienten este párrafo de la avalista del periodista. Emilia Marroquín fue absuelta de su segundo juicio el 30 de agosto de 1937 y, desde el 14 de julio, la empleada estaba en libertad provisional a petición de su abogado defensor. Por otra parte, en la sesión del juicio celebrada ese mismo día declaran varios testigos a favor de Emilia Marroquín, pero son vecinos o compañeros. Ninguno de ellos responde al nombre de Francisco Cruz Salido, que por otra parte debía tener un motivo de especial relieve para trasladarse desde Valencia a Madrid con el objetivo de declarar en un juicio hasta cierto punto menor. Tampoco parece aclarado por qué debió ir al convento de los Padres Paules, en Hortaleza, para impedir que Emilia Marroquín fuera evacuada por unos «perseguidores» nunca identificados, a pesar del posible interés del tribunal militar por conocer sus nombres.

La solidaridad del periodista fue más allá de poner en libertad a quien estaba en libertad según lo reflejado en el sumario. De acuerdo con el escrito de 1940 remitido al tribunal militar, el 21 de julio de 1937 «le acompañó a la cárcel de Las Ventas, lográndole una visita especial para sus compañeras; comunicándole entonces que no tuvo ninguna suerte en la gestión que le encargó en su visita a la cárcel en el mes de noviembre del año anterior, porque los citados señores

Galarza, Santa Úrsula y Granero no se encontraban ya en la cárcel [Modelo] cuando fue a interesarse por ellos». Emilia Marroquín no cita los nombres ni la adscripción de esas «compañeras» que, a primera vista, pueden ser relacionadas con la quinta columna o grupos similares. La iniciativa habría sido entonces sorprendente por parte del periodista, pero más asombroso resulta una incoherencia implícita en el propio texto: Francisco Cruz Salido, desde Valencia, sabía de los problemas de su amiga, pero durante ocho meses no tuvo tiempo de hacerle llegar el resultado infructuoso de su urgente gestión en la cárcel Modelo.

A tenor de la documentación localizada, Emilia Marroquín no debió afrontar nuevos problemas judiciales con las autoridades republicanas desde el verano de 1937, pero siguió mostrándose solidaria con unas «compañeras» de las que nunca aporta alguna identificación capaz de probar la veracidad de lo manifestado. Según el escrito de 1940, «evacuadas las compañeras de cárcel a Alaquàs (Valencia), la exponente le manifestó en dos ocasiones su deseo de ir a visitarlas para continuar dándoles aliento encontrando en el señor Cruz Salido todas las facilidades para efectuar los viajes, proporcionándole algunos alimentos para las mismas y presentándose en una de las ocasiones a acompañarla él mismo para mayor facilidad en la obtención de la visita (habiendo estado más de una hora hablando con sus compañeras); y en la otra, proporcionándole una carta mediante la cual obtuvo el mismo resultado».

La actitud de Francisco Cruz Salido parece encomiable, pero resulta difícil de justificar si Emilia Marroquín hubiera sido un miembro de la quinta columna con un espíritu solidario con respecto a «las compañeras», que -por la peculiaridad del establecimiento de Alaquàs- debieron ser esposas, hijas o demás familiares de apellidos ilustres en el bando de los sublevados a la espera de un canje. De hecho, resulta sorprendente que la exautiva n.º 5584 nunca cite su militancia en Falange o alguna organización concreta. Tampoco menciona a la quinta columna o aporta datos concretos de sus compañeros para avalar su testimonio. Esa ausencia de pruebas parece sorprendente en quien se atreve a defender a unos procesados en un consejo de guerra, pero aclara algo los motivos de la cercanía del periodista y Emilia Marroquín, que durante la guerra y a preguntas de los fiscales o jueces siempre se presentó como militante de la Unión

Republicana Femenina, la organización creada por Clara Campoamor, aparte de votante de las izquierdas en las elecciones de febrero de 1936. De hecho, la citada organización por entonces se había integrado en Izquierda Republicana.

Estos últimos datos, como es previsible, quedan obviados en el testimonio escrito de 1940 con destino al tribunal militar, que finaliza sin indicar nada acerca de la relación entre el periodista y la excautiva, pero con una conclusión destinada a conmover a los oficiales que condenarían a la pena de muerte al primero: «Y, en definitiva, que siempre que ha acudido a él, le ha encontrado propicio y eficaz en la ayuda que del mismo ha solicitado». La solidaridad de Francisco Cruz Salido pudo ser real, pero del texto no se deducen los motivos de la misma al margen de la natural predisposición del periodista. Las posibles preguntas al respecto por parte del tribunal habrían sido, probablemente, incómodas para quien tenía una trayectoria de excautiva con documentos sumariales comprometedores.

El testimonio oral y escrito de Emilia Marroquín no consiguió ablandar a un tribunal inflexible, pero la empleada pronto convertida en funcionaria mantuvo su solidaridad con visitas a la cárcel una vez condenados los periodistas y, junto con su hermana Sabina, las huérfanas de la calle Hernán Cortés, n.º 8 comprarían la sepultura y pondrían la enigmática lápida en honor de Julián Zugazagoitia y Francisco Cruz Salido. El misterio en torno a la misma se ha mantenido hasta ahora (*El País*, 9-XII-2021) y merece la pena completar el perfil de una mujer anónima, Emilia, que debió afrontar bastantes problemas en el Madrid sitiado.

La empleada de la Compañía Telefónica pudo presentar en el Juzgado n.º 8 avales que prueban su participación en distintas actividades a favor de la República, pero en octubre de 1936 fue detenida abriéndose un período de silencio documental que se extiende hasta el 27 de enero de 1937. Ese día la reclusa en la cárcel de mujeres de San Rafael declara en sede judicial que era empleada de la citada empresa desde 1925, afiliada a la Unión Republicana Femenina y que el 13 de octubre de 1936 fue detenida acusada «de haber anunciado el movimiento sedicioso y otras noticias por el estilo; todas absolutamente falsas, por no ser cierto haberse dedicado a propagar noticias de ninguna clase». Asimismo, Emilia Marroquín declara ante el juez «que en las elecciones últimas votó a las izquierdas», circunstancia que durante el juicio

aparece avalada por un testigo, que la recuerda enfrentada ese día de febrero de 1936 a una representante de Falange.

De acuerdo con esta declaración, que no va acompañada en el sumario de otros documentos relacionados con la supuesta detención en octubre de 1936, Emilia Marroquín habría estado cuatro meses presa hasta declarar ante el juez instructor. Semejante período sorprende y contrasta abiertamente con la premura a la hora de dar por cerrada la instrucción, pues al día siguiente, el 28 de enero de 1937, Ricardo Calderón Sempere, magistrado del Tribunal Supremo, certifica que la empleada fue puesta a disposición de los Tribunales y Jurados Populares por «desafecta al Régimen y propaladora de bulos dentro de la Compañía Telefónica». En el mismo documento, el magistrado declara cerrada la fase de instrucción y remite el caso al Juzgado n.º 8 de Madrid para que la procese. Es decir, hubo supuestamente cuatro meses de detención para una instrucción que se limitó a la declaración de la encausada y, sin más actuaciones, dio paso a un rápido procesamiento. El contraste sorprende de nuevo.

El juicio se celebró el 9 de febrero de 1937. Ese mismo día Emilia Marroquín quedó absuelta por falta de pruebas que avalaran la acusación. De hecho, la encausada cuenta con dos testigos afiliados a la UGT que declaran a su favor y presenta un certificado de su trabajo como mecanógrafa en la Jefatura de los Servicios Sanitarios del Ejército Republicano. Este documento y los testimonios de los vecinos bastaron para dejarla en libertad, pero ese día -como si hubiera alguna mano siniestra en esta sorprendente historia- Emilia Marroquín volvió a ser detenida y encarcelada. Se inicia así, en el mismo juzgado, el expediente 330, que sucede al 110 estando ambos digitalizados y accesibles a través del portal PARES.

Emilia Marroquín debió ser detenida en febrero de 1937, pero hasta el 24 de abril de 1937 no aparece documento alguno de carácter acusatorio que haya quedado incorporado al sumario. Si lo hubo, la mano siniestra actuó de nuevo para dilatar unos tiempos de detención poco acordes con la entidad de las acusaciones y menos todavía con las posteriores absoluciones. Ese día de abril, el consejero de orden público acusa a la empleada «por saberse que desde hace tiempo ha mantenido relaciones íntimas con Ángel Santa Úrsula, empleado igualmente en

la Compañía Telefónica, significado elemento fascista, el cual desapareció a raíz del movimiento, suponiéndose que la detenida mantiene contacto con dicho individuo». Entramos así en el sinuoso campo de las delaciones por comportamientos ajenos a lo delictivo y relacionados con la intimidad de los acusados. A partir de esta constatación, cualquier arbitrariedad es imaginable, máxime teniendo en cuenta que la víctima era una mujer soltera en supuestas relaciones con un hombre casado.

Tres días después de formulada la acusación, Emilia Marroquín declara ante el Juzgado n.º 8 y manifiesta que había sido puesta en libertad el 3 de marzo de 1937, pero que horas después fue detenida de nuevo. La empleada reconoce la relación con Ángel Santa Úrsula -uno de los tres presos de la Modelo por los que se interesó ante Francisco Cruz Salido-, «no siendo cierto en absoluto haya tenido con el mismo otras relaciones que las naturales de compañero de trabajo; que sabe y le consta que dicho Ángel fue detenido en los primeros días de octubre, pues la propia declarante en unión de la esposa de aquel fue a llevarle comida y ropa a la Dirección General de Seguridad, ignorando si ha sido puesto o no en libertad».

Emilia Marroquín fue detenida por primera vez el 13 de octubre de 1936, según manifiesta ella misma en el sumario 110. A la vista de la anterior declaración de 1937, parece probable que los genéricos bulos a los que se hacía referencia pudieran tener una causa más concreta: su amistad con quien era un jefe en la empresa y, al parecer, significado elemento derechista ya detenido. Si de verdad acudió en compañía de la esposa a la Dirección General de Seguridad para ayudarle, o no, ya es una cuestión que solo un novelista podría convertir en hipótesis de trabajo. En cualquier caso, Emilia Marroquín pudo ser una mujer dispuesta a ver en el mismo sitio a detenidos de ambos bandos en un intervalo de tres años.

La instrucción del segundo caso procesal de la empleada fue sencilla y breve. Al día siguiente de la declaración, el juez ordena a dos agentes que pregunten a los vecinos de la encausada acerca de su comportamiento. El resultado fue negativo, pues el 3 de mayo de 1937 los desplazados al domicilio de la calle Hernán Cortés emiten un informe donde se indica que la vecindad no la consideraba desafecta al Régimen. De la supuesta relación de Emilia con Ángel



nada se indica. Tal vez porque el juez no mandara a los agentes que indagaran en este sentido.

La instrucción del caso fue mínima porque tampoco la acusación parecía grave en aquel contexto. En un acta no fechada, se constata la primera sesión del correspondiente juicio, que fue suspendido a petición del fiscal. Este, a la vista de la escueta instrucción, sospecha que los hechos son los mismos por los que Emilia Marroquín ya había sido absuelta por el propio Juzgado n.º 8. Una vez aclarado que la acusación era por otro motivo, aunque resultara igualmente genérica y carente de pruebas, el 9 de julio de 1937 el fiscal pide el procesamiento de la empleada, cuyo juicio tendría lugar el 14 del mismo mes. La celeridad de los plazos procesales siempre contrasta con los supuestos meses que la empleada pasó en las cárceles o las checas.

Preguntada por el fiscal acerca de la acusación, Emilia Marroquín atribuye la segunda detención «a una venganza personal sin saber quién puede ser esa persona». Frente a semejante anonimato, la militante de Unión Republicana Femenina cuenta con el testimonio favorable de varios vecinos, que la consideran una mujer afecta al Régimen y de la que se desconocen actividades en contra del mismo. A la vista de la contradicción entre la anónima acusación, siempre formulada en términos genéricos, y los explícitos testimonios presentados por la defensa, el juez solicita nuevos informes sobre la procesada, a la que deja en libertad provisional a petición de su abogado defensor. Los tiempos de los consejos de guerra todavía no habían llegado y esta posibilidad era una realidad documentada.

El único informe recabado que consta en el sumario es el emitido por el Comité Central de Control Obrero de Teléfonos el 16 de agosto de 1937. El mismo indica que Emilia Marroquín «no se distinguió por sus manifestaciones derechistas». La posibilidad de que la empleada fuera una quintacolumnista parece descartada. «Sin embargo de lo expuesto, mantenía, al parecer, relaciones íntimas con Ángel Santa Úrsula, empleado también de Teléfonos con categoría de jefe, al que nos vimos obligados a despedir por considerarle como elemento reaccionario y al que oportunamente detuvo la policía». Es decir, el comité obrero no solo velaba por la fidelidad de los empleados a la II República, sino también por las relaciones sentimentales siempre que las mismas tuvieran un

protagonista considerado como «elemento reaccionario» y pudieran derivar en una ayuda a los desafectos o sublevados.

Ante la vaguedad de la acusación y la absoluta falta de pruebas que relacionaran a Emilia Marroquín con las actividades quintacolumnistas, aunque fuera a título de amante, el fiscal retira la acusación y comparte el criterio del testigo Juan Soriano Lera, afiliado al PSOE y UGT, que considera a Emilia Marroquín como una republicana. El 30 de agosto de 1937, casi un año después del inicio de sus problemas por una supuesta relación amorosa convertida en motivo de denuncia anónima o venganza personal, la empleada de la Compañía Telefónica fue definitivamente absuelta. Poco después, pidió la certificación de la sentencia para reincorporarse a su puesto en la empresa, donde ignoramos si debió dar nuevas explicaciones acerca de sus relaciones sentimentales. En cualquier caso, hasta el final de la guerra, justo cuando fue más activa esa quinta columna, de Emilia Marroquín no se supo entre las «compañeras». Al fin y al cabo, la soltera solo fue cautiva por una supuesta relación amorosa, aunque en la declaración de 1940 se presentara como una excautiva por razones, nunca aclaradas o detalladas al margen de la alusión al asesinato de Calvo Sotelo, más presentables ante un tribunal militar.

La investigación debe proseguir para saber de la suerte de los tres reclusos citados por Emilia Marroquín, en especial la de Ángel Santa Úrsula, y conocer la trayectoria como funcionaria de la testigo gracias a la consulta de su hoja de servicios ya solicitada. De hecho, sorprende que la empleada de 1937 sea la funcionaria de 1940, salvo que la huérfana consiguiera esa plaza en la inmediata posguerra después de fracasar en sus documentados intentos de 1931 (Ayuntamiento de Madrid) y 1933 (Ministerio de Obras Públicas). Esta información acerca de unos personajes casi anónimos de la guerra podrá ayudarnos a comprender lo sucedido alrededor de las contradictorias declaraciones de 1937, cuando Emilia Marroquín se presentó como una mujer de izquierdas afiliada a Unión Republicana Femenina, y de 1940, cuando la seguidora de Clara Campoamor firmó con su carnet de excautiva un texto donde pretende figurar como partidaria de los sublevados.

No obstante, lo relevante del caso dista de estar relacionado con la adscripción partidista de una mujer que apenas participó en la vida política de aquellos

convulsos años. Las hipótesis son arriesgadas a partir de los pocos datos localizados hasta ahora, pero cabe pensar que Emilia Marroquín fuera una mecanógrafa enamorada de Ángel Santa Úrsula. La relación pudo ser problemática por la condición de casado del jefe de la Compañía Telefónica y, sobre todo, por sus simpatías hacia los sublevados que le llevaron a la cárcel Modelo en unos momentos especialmente trágicos para los allí reclusos. La empleada pagó cara esa relación, pues al margen de quedar absuelta en dos ocasiones permaneció encarcelada durante un período que no se corresponde con la vaguedad de la acusación y, sobre todo, con las sentencias dictadas por el Juzgado n.º 8.

La experiencia debió ser dura, pero llegado el final de la guerra le permitió contar con un carnet de prestigio en la Victoria. La condición de excautiva le abriría puertas y, desde esa relativa seguridad, Emilia Marroquín intentó ayudar a unos periodistas con quienes mantenía una deuda por su comportamiento cuando ella estuvo en la cárcel. De ahí su osadía al presentarse en el consejo de guerra de 1940 con un texto y un testimonio oral donde las verdades se entremezclan con las mentiras o las dudas acerca de la veracidad de lo afirmado. El objetivo era salvar a los periodistas como ella había sido salvada en 1937, gracias a los testimonios de varios vecinos afiliados a organizaciones izquierdistas. La diferencia es que Emilia Marroquín contó con un verdadero abogado defensor y un fiscal que para acusar necesitaba pruebas más allá de las denuncias anónimas o los posibles testimonios. Dadas ambas circunstancias, quedó absuelta en dos ocasiones. Los periodistas no pudieron defenderse y el tribunal que les juzgó nunca adujo pruebas más allá de los testimonios acusatorios y unas declaraciones obtenidas bajo tortura. La suerte de Julián Zugazagoitia Mendieta y Francisco Cruz Salido estaba echada desde que fueron ilegalmente detenidos en Francia. Todo lo sucedido a continuación forma parte de una farsa jurídica y, en la misma, el testimonio de Emilia Marroquín sería una iniciativa tan meritoria humanamente como irrelevante desde el punto de vista jurídico.

El consejo de guerra comenzó a las seis de la tarde y terminó antes de irse a cenar los miembros del tribunal que emitieron cinco condenas a muerte y una a treinta años. A lo largo de unas dos horas desfilaron varios testigos, declararon los encausados y el fiscal presentó la acusación, que pronto se convirtió en una

sentencia ya analizada. Emilia Marroquín solo dispondría de unos pocos minutos para intentar ayudar desesperadamente a quienes la habían ayudado. No lo consiguió y, a partir de ese momento, mostró su solidaridad con la suerte de los periodistas y en compañía de su hermana tuvo un insólito gesto en aquella época: la compra de una sepultura para honrar la memoria de dos fusilados. Solo cabe agradecer su humanidad y apenas importa saber si la empleada de la Compañía Telefónica era de Falange o de Unión Republicana Femenina. La dignidad y el coraje carecen de carnet.